



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

Demandante: LUÍS HUMBERTO SILVA SÁNCHEZ  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.  
Litis x pasiva: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
Radicado: 05001 31 05 013 2018 00759 01  
Sentencia: S-218

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 4 de octubre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

LUÍS HUMBERTO SILVA SÁNCHEZ demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- por el incumplimiento al deber de información, y, en consecuencia, se DECLARE su derecho a retornar al Régimen de Prima Media con

Prestación Definida -RPM- administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad. Busca además que se ORDENE a PROTECCIÓN S.A. el traslado de los aportes cotizados en el RAIS a COLPENSIONES, para que ésta última proceda con el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación. Pretende consecuentemente el reconocimiento de la indemnización de perjuicios representada en la diferencia entre la mesada pensional que viene recibiendo y la que le hubiera correspondido de permanecer en el RPM, así como las mesadas dejadas de percibir desde el cumplimiento de los requisitos, en cualquier caso, incluyendo las costas y agencias en derecho.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 10 de julio de 1950; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 10 de enero de 1978, entidad en la que acumuló un total de 667.57 semanas de cotización; que se trasladó al Régimen de Ahorro Individual a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. el 19 de junio de 1996; que en toda su vida laboral tiene cotizadas 1360 semanas; que el fondo privado nunca le informó acerca de las condiciones necesarias para acceder a una pensión de vejez a cualquier edad, ni le indicó las ventajas y desventajas de trasladarse de régimen pensional; que tampoco recibió soporte informativo que le permitiera identificar los riesgos a los que se sometía con esa decisión; que en términos generales se omitió el deber de suministrar una información adecuada, clara, suficiente, comprensible y cierta sobre las consecuencias legales y económicas del cambio de régimen pensional; que realizó cotizaciones al sistema hasta el 30 de junio de 2013; que solicitó la pensión de vejez el 4 de julio de 2013, la cual fue reconocida por PROTECCIÓN S.A. según comunicación del 17 de febrero de 2014; y que en el Régimen de Prima Media habría recibido una mesada superior y se habría podido pensionar desde el 10 de julio de 2010.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación a esa entidad y el posterior traslado a la AFP PROTECCIÓN S.A., indicando frente a lo demás que no le consta por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso a lo pretendido indicando que no se cumplen los requisitos estudiados por la jurisprudencia para establecer la viabilidad de la nulidad o ineficacia del traslado del demandante, teniendo en cuenta que ya se encuentra pensionado por la AFP PROTECCIÓN S.A. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante, la afiliación previa al ISS, el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual y todo lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de vejez, explicando que no le consta lo que tiene que ver con entidades ajenas a su entorno. Aclara que en su caso particular le brindó al demandante una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, así como las diferencias entre ambos regímenes pensionales. Se opuso además a las pretensiones ya que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento y el formulario de vinculación se suscribió de forma libre y voluntaria. Además, el demandante se encuentra pensionado por vejez desde el año 2014 lo que convalidó su consentimiento de pertenecer a ese régimen. Como excepciones propuso falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, pago, compensación, prescripción y aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema.

### **DEMANDA DE RECONVENCIÓN**

Además de contestar la demanda como se acaba de indicar, PROTECCIÓN S.A. propuso demanda de **reconvencción** contra el señor

LUÍS HUMBERTO SILVA SÁNCHEZ pretendiendo que, en el evento de declararse la ineficacia de traslado solicitada, lo condene a reintegrar las sumas de dinero que se le han venido cancelando por concepto de pensión de vejez desde el mes de julio de 2014 y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, junto la rentabilidad que ese dinero habría producido bajo su administración.

Al contestar la demanda de reconvención, el señor LUÍS HUMBERTO se opuso a lo pretendido por PROTECCIÓN S.A. manifestando que es su obligación asumir, a título de perjuicios, el capital y aportes que requiera COLPENSIONES para el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990. Se opone al reintegro de los conceptos solicitados, pues con ello se estarían desconociendo sus derechos fundamentales y se estaría afectando su mínimo vital. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada en reconvención por carencia de efectos de un negocio jurídico, inexistencia de veracidad de la información suministrada por PROTECCIÓN S.A., compensación, pago e imposibilidad de condena en costas.

Mediante auto del 6 de marzo de 2019, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín integró en calidad de litisconsorte necesario por pasiva a la Nación, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el cual, al contestar, también se opone a las pretensiones explicando que el bono pensional de la demandante ya fue emitido y redimido según Resolución 10237 del 23 de octubre de 2012, sin que resulte válido que 6 años después pretenda desconocer su condición de pensionado. Como excepción de fondo propuso únicamente la de buena fe.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 4 de octubre de 2021, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra ante la imposibilidad de declarar

la ineficacia de traslado cuando se trata de una persona con la calidad de pensionada y DECLARÓ probada la excepción de prescripción respecto de la pretensión de indemnización de perjuicios. Adicionalmente, ABSOLVIÓ al demandante de la pretensión planteada mediante demanda de reconvención por PROTECCIÓN S.A., condenándolo al pago de las costas del proceso, cuyas agencias en derecho fueron estimadas en la suma de \$600.000.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con lo decidido, la apoderada del demandante presentó recurso de apelación teniendo en cuenta que fue viciado en su consentimiento por parte del fondo aquí demandado y se desconoce el precedente judicial vertical y horizontal según el cual se debe declarar la ineficacia de los traslados de régimen cuando no es libre y voluntaria la decisión de cambio, es decir, en caso de que se produzca a través de engaños o cuando se brinda un asesoramiento inadecuado, tal y como se ha indicado por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Agrega que el demandante en la actualidad se encuentra trabajando toda vez que los valores percibidos en su mesada pensional no son acordes con las cotizaciones que hizo a lo largo de su vida; los asesores de los fondos privados no tenían la capacitación adecuada y nunca le advirtieron los riesgos que existían por trasladarse y que la pensión podría ser inferior en el RAIS en comparación con el RPM. Le correspondía al fondo privado accionado probar que sí habían cumplido con la carga informativa que les era exigible, sin embargo, no lo hicieron porque en la realidad no cumplieron con esta carga; en el caso en concreto el *a quo* no aplicó las circunstancias fácticas y en consecuencia falló a favor del fondo privado, desconociendo que la información es considerada como un derecho fundamental de todo ciudadano y correlativamente una obligación del estado en hacerlo respetar y garantizar su cumplimiento.

Insiste en la solicitud de perjuicios que quedó debidamente establecida en el litigio de conformidad con la sentencia SL 373 de 2021; se advierte que se aplicó la prescripción de los derechos laborales, sin embargo, considera que en este caso se debió aplicar el termino de 5 años sobre responsabilidad contractual.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado del demandante se pronunció insistiendo en la falta de información del fondo privado al momento del traslado de régimen pensional, por lo que no puede hablarse de una manifestación libre y voluntaria al momento de suscribir el respectivo formulario. Aunque el demandante se encuentra pensionado, tal situación no es óbice para que se desdibuje la causal de ineficacia de la afiliación, en tanto lo que se solicita en esta instancia es el cumplimiento de los requisitos del acto de traslado de régimen, más allá de los actos posteriores o incluso las utilidades que busque la parte, toda vez que se verifica que el fin último es la satisfacción total del derecho pensional. Es así que el deber de información, suficiente, veraz y previo a la decisión del cambio pensional debe verificarse en todos los actos de afiliación, al margen de condiciones de los actores, ora porque se encuentren próximos a pensionarse o ya ostenten tal calidad.

De otro lado, sostiene que se le causaron perjuicios tales como el lucro cesante por la diferencia en las mesadas pensionales reconocidas por parte del fondo privado y se le vulneraron los derechos de rango constitucional al Mínimo Vital y Móvil consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Cita, además, la sentencia SL 373 del 10 de febrero de 2021 y dice haberse desconocido el contenido de los artículos 271 y 272 por falta de información en el traslado de régimen pensional y al ser afectado el derecho fundamental a la pensión de vejez, derecho subjetivo en general, corresponde la reintegración del derecho, esto es, reconocérsele el derecho a la pensión en los

términos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, condenándose al pago de la pensión en forma completa, con carácter vitalicio y transferible a sus beneficiarios, sin indagar sobre la triada de la responsabilidad civil: culpa, daño y relación de causalidad.

Finalmente, refiere que el derecho a la pensión es imprescriptible, sólo prescriben las mesadas no cobradas oportunamente, en consecuencia, solo prescribirán las mesadas producto de la reparación no cobradas oportunamente, de lo contrario no estaríamos frente a una reparación. Ahora bien, es posible que surjan otros perjuicios concomitantes con la reparación antes prevista, en cuyo caso, la forma de reparación es la indemnización, la cual si está sujeta a la prescripción de cualquier daño.

### **CONSIDERACIONES:**

Antes de abordar el primero de los temas motivo de apelación, relacionado con la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional con fundamento en la indebida información suministrada al demandante cuando optó por afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, conviene señalar que las siguientes situaciones fácticas están claras a esta altura del proceso:

- 1.- Que el señor LUÍS HUMBERTO SILVA SÁNCHEZ nació el 10 de julio de 1950;
- 2.- Su afiliación inicial al otrora INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se produjo el 10 de enero de 1978 y en esa entidad acumuló un total de 667.57 semanas de cotización;
- 3.- A partir del mes julio 1966 comenzó a realizar cotizaciones al RAIS, administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A., en virtud de la suscripción del formulario de traslado el 19 de junio de ese mismo año.

4.- El Sr. SILVA SÁNCHEZ gestionó y efectivamente obtuvo la pensión de vejez según comunicación del 17 de febrero de 2014 bajo la modalidad de retiro programado por cuenta de la AFP PROTECCIÓN S.A., reconocida y pagada con retroactividad desde el 4 de julio de 2013 en cuantía para ese año de \$2 '395.502.

Si bien es cierto, en principio este Tribunal a través de sus distintas Salas de Decisión Laboral ha declarado consistentemente la ineficacia del traslado del RPM al RAIS, cuando los Fondos Privados no logran acreditar el cumplimiento de su deber legal de información integral, clara e idónea, ello se ha dado cuando de **afiliados** al sistema se trata, en la medida en que su situación no ha mutado al nuevo estatus de **pensionado**, pues este último tránsito supone - en el caso de los fondos privados cuando el interesado opta por una determinada modalidad pensional - la celebración de un nuevo acto jurídico subjetivo, diverso del primero, cuyos efectos sobrevinientes no deberían verse afectados por la presunta ilegitimidad del acto primigenio, jurídicamente independiente de este último. El afiliado ha franqueado la línea que la separa de estatus, convirtiéndose en pensionado, lo que lo sitúa en la categoría de beneficiario de un derecho adquirido bajo las normas que rigen su nueva condición, sin que en este caso pueda aducirse - ni se alega en este evento - una nueva ineficacia de la solicitud de pensionamiento.

En sentencia unificada dictada por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el día 14 de agosto del año 2019<sup>1</sup>, por mayoría de sus integrantes se aprobó la decisión, relacionada íntimamente con el caso que ahora concentra la atención de esta Sala de Decisión, en el sentido de deslindar las 2 categorías anteriores. Así, luego de enunciar la evolución jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la ineficacia del traslado de

---

<sup>1</sup>LUIS ALFONSO GALVIS TORRES contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS; la ACP COLPENSIONES y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., RUN 05001-31-05-007-2015-01295-01. M. P. Dr. ORLANDO GALLO ISAZA



régimen en general, especialmente en el sentido de que el juez debe, ciertamente, constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico, y bien, que le incumbe a las AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, se señaló en el fallo que se cita lo siguiente<sup>2</sup>:

*“Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso disanalógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.*

*(...)*

*Viene a colación la referencia al consecuencialismo, porque resultaría posible darle continuidad a lo razonado por la Sala Laboral de la Corte para declarar la ineficacia de los traslados al RAIS en el caso de los afiliados y hacerlo extensivo a quienes ya se han pensionado en los fondos privados. Probablemente necesitaría un menor esfuerzo argumentativo plegarse a las razones de nuestro tribunal de cierre y seguir fallando en cascada idénticamente los casos de afiliados y de pensionados.*

*Pero las calidades de **afiliado y pensionado** ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la exequibilidad del art. 107 de la Ley 100/93, que limitaba la*

---

<sup>2</sup> Advirtiendo que tal sentencia se dictó con sujeción al art. 35 del CGP, según el cual: “A solicitud del magistrado sustanciador, la Sala plena especializada o única podrá decidir los Recursos de Apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial”. Norma que se entiende en concordancia con el art.10 inciso final del Acuerdo N° PCSJA17-10715, por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los T.S. del Distrito Judicial. Lo anterior para significar que no es posible a las Salas de Decisión, separarse de dicho antecedente.

posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición:

Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.

El Tribunal constitucional profirió la sentencia C-841 de 2003, en la cual abordó dos problemas jurídicos, a saber:

1. ¿Es contrario al principio de igualdad que se permita a los afiliados, pero no a los pensionados, trasladarse entre administradoras de pensiones?
2. ¿Vulnera el derecho a la seguridad social de los pensionados que se les impida escoger la entidad administradora de pensiones o plan de capitalización que les resulte mejor administrativa o financieramente, siendo ya pensionados?

La Corte, ante la acusación de que la norma contenía un trato discriminatorio, realizó el correspondiente test de igualdad, entendiendo que:

“...la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su prestación se haga de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta.”

Encontró además que los fines perseguidos por el legislador eran legítimos e importantes, en tanto,

“Tal como se señaló anteriormente, el art. 107 de la Ley 100/93 busca alcanzar al menos 2 fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la

*rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.*

*Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.*

*Halló también que el medio elegido por el legislador resultaba idóneo para el logro de los fines perseguidos, pues,*

*“Permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado.*

*La pregunta que lógicamente ha de plantearse este Tribunal es si la prohibición de movilidad para pensionados que el legislador estableció y la Corte Constitucional prohijó, en el caso citado para trasegar dentro del régimen de ahorro individual, no tendrá aún mayor entidad para los asuntos como en el de la ineficacia, donde la orden que finalmente contienen nuestras sentencias es la de inscribir al demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Esto es, mutar su régimen pensional.*

*La prohibición de traslado para quienes les faltaren menos de 10 años para pensionarse, introducida en la ley 100 por el art. 2º de la Ley 797/03, también fue avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 de 2004, con consideraciones que si bien se referían a una norma posterior, reafirman la pertinencia de esas limitaciones a la movilidad entre regímenes. Como en el caso de la C-841 de 2003, la norma aquí demandada también superó el test de proporcionalidad y*

abundaron en ella motivaciones claramente consecuencialistas. Este párrafo abunda en estas últimas:

*“Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: “obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”*

(...)

*Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los arts. 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100/93, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.*

(...)

*Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha*

*contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum :*

*“(…)*

*Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.*

*Estos sería solo dos ejemplos del impacto que en el mundo real tendría declarar la ineficacia de la afiliación de quienes ya se han pensionado en el régimen de ahorro individual. Impacto que responsablemente esta Sala quiere evitar, decidiendo mediante esta sentencia de unificación que no podrá declararse la ineficacia ni la nulidad de su afiliación.”*

Así mismo, en providencia del 3 de septiembre de 2019, esta misma Sala Primera de Decisión, con ponencia del mismo Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, se pronunció así:

*“Se podría agregar por esta Sala Primera en las implicaciones jurídicas consecuencialistas, que si sólo se mira el traslado inicial y la libertad informada del afiliado sin tener en cuenta el nuevo acto jurídico que reconoce la pensión solicitada de manera libre y voluntaria y sin señalar ninguna inconformidad antes de adquirirla, sería como mantener una obligación irredimible y eterna, entendida como el poder de no permitir la extinción de las obligaciones, a través de medios válidos, como un acto jurídico nuevo, por ello estos actos no pueden, ni deben depender de la voluntad exclusiva del acreedor o del deudor, quienes, como en este caso, varios años después del reconocimiento de la pensión, podrían alegar que el acto de afiliación o traslado inicial del sistema pensional, es ineficaz y que debe entonces trasladarse al otro régimen, es decir, la ineficacia traspasaría el nuevo acto o negocio jurídico y otros*

*contratos colindantes, como retrotraer contratos jurídicos con 3os de buena fe, lo que implica eventuales demandas de las AFP y aseguradoras para deshacer la pensión de invalidez y sobrevivientes que fueron entregadas a un usuario, bajo un acto ineficaz, al igual que las demandas de reconvención para que se devuelva lo pagado y ya gastado por el pensionado. En cuanto al Bono Pensional pagado se deberá retornar el mismo al ministerio. ¿Qué pasará con los pensionados anticipadamente, que negocian el Bono Pensional antes de fecha de redención normal? ¿Se deberá incluir a la litis a los inversionistas que pagan el Bono Pensional? Y quien asume la diferencia entre lo entregado al fondo por el inversionista y lo pagado por el Ministerio, etc.*

*En conclusión habrá de entenderse que sí existió un nuevo acto jurídico que genera el estatus de pensionado y en el que no existió un vicio del consentimiento pues se realizó a partir de la pensión rogada, se garantizó que el sujeto ha expresado voluntaria y libremente su intención de participar en el acto jurídico o contrato para el reconocimiento de la pensión de vejez, después de haber comprendido la información de los requisitos requeridos para adquirirla, los beneficiarios, la tasa de reemplazo, el capital que ahorro, la modalidad de la pensión que adquirirá y quien la pagará, etc, no se podría hablar del concepto de ineficacia, pues como se vió, la línea jurisprudencial de la corte hace imprescriptible esta figura jurídica pero "porque lo que se busca es materializar el acceso a la pensión de vejez". Ello implica que si ya se dio la pensión de vejez en el RAIS, los vicios del acto anterior de afiliación dejan de operar, por existir un nuevo acuerdo entre las partes y lo que podría alegarse a partir de este nuevo acto sería una nulidad absoluta o relativa, donde la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, y ya este sería un acto prescriptible y saneable."*

Criterio que ha sido acogido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia gracias a que respecto a la situación objeto de discusión ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en sentencias como la SL 373 del 10 de febrero de 2021, Rad. 84475, la SL 3707 del 18 de agosto de 2021, rad. 86706, la SL 1113 de 2021 o más recientemente la SL 2176 del 24 de mayo de 2022 en las que indicó:

*"... si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)<sup>3</sup>, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.*

*(...)*

*... de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado."*

En esas condiciones y por las razones vistas en esta providencia, sin que sea necesario abundar en razones, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Decisión que incluye lo relativo a la indemnización de perjuicios que se reclama, frente a la cual se declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada. Lo anterior gracias a que para la Sala resulta evidente que en este caso han transcurrido más de los 3 años que establecen los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la seguridad Social, normas aplicables a este tipo de situaciones, contados desde que la obligación se hizo exigible y hasta la fecha de su interrupción por la vía judicial.

Criterio que además ha sido advertido por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 373 del 10 de febrero de 2021, Rad. 84475,

---

<sup>3</sup> SL1688-2019, SL3464-2019

reiterada en la SL 5172 del 3 de noviembre de 2021, Rad. 83246 y en la SL 053 del 26 de enero de 2022, Rad. 86858, en las que de manera muy precisa advirtió: *“En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento”*.

En el presente caso tenemos la siguiente sucesión de hechos determinantes a la hora de establecer la prescripción propuesta por la AFP PROTECCIÓN S.A.

- i) Antes del traslado de regímenes pensionales no hubo proyección alguna respecto de las posibilidades de pensión en uno y otro;
- ii) El traslado al RAIS se produjo mediante la suscripción del formulario el 19 de junio de 1996 (página 62);
- iii) La solicitud de pensión de vejez fue radicada el 4 de julio de 2013 (página 69);
- iv) El reconocimiento se produjo mediante comunicación del 17 de febrero de 2014, notificada el 7 de marzo de ese mismo año (páginas 69 a 71);
- v) No hubo reclamación a la entidad antes del inicio del proceso; y
- vi) La demanda fue radicada el 4 de diciembre de 2018 (página 37).

En consecuencia, como claramente transcurrieron más de 3 años desde el reconocimiento pensional hasta la presentación de la demanda, cualquier reclamo que hubiera podido hacerse se encuentra afectado por la prescripción, sin que con ello se afecte el derecho como tal a la pensión de vejez del demandante, quien la continuará recibiendo de su fondo privado PROTECCIÓN S.A.



Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de las entidades demandadas distribuida en partes iguales, fijando como agencias en derecho la suma de \$1`000.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 4 de octubre de 2021.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de las entidades demandadas distribuida en partes iguales, fijando como agencias en derecho la suma de \$1`000.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ae6eb19eb50ccf37d9b7fe6d925a0af380f9cf9ccb13c2db32f5b15385c6cc80**

Documento generado en 25/08/2022 10:16:50 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**